

HONDURAS
INFORME DE PAÍS SOBRE LAS PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS 2007
Emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
11 de marzo de 2008

Honduras es una democracia constitucional, con una población de aproximadamente 7.4 millones de habitantes. En las elecciones nacionales de noviembre de 2005, consideradas por los observadores internacionales y nacionales como generalmente libres y justas, los votantes eligieron como presidente a José Manuel Zelaya Rosales del Partido Liberal. Los partidos Liberal y Nacional continuaron dominando la política del país en el marco de un sistema multipartidista. Mientras que las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo instancias en donde elementos de las fuerzas de seguridad, en particular de la policía, actuaron en forma independiente de la autoridad gubernamental.

Se reportaron los siguientes problemas de derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales por miembros de la policía y de agentes del gobierno; ejecuciones arbitrarias y sumarias cometidas por elementos clandestinos, pandillas callejeras, y ex miembros de las fuerzas de seguridad; golpizas y otros abusos en contra de detenidos cometidos por las fuerzas de seguridad; condiciones crueles en las prisiones; fracaso en la provisión de un debido proceso de la ley; prolongados períodos de detención previos al juicio; politización del sistema judicial, así como corrupción judicial y debilidad institucional; erosión de la libertad de prensa; restricciones gubernamentales para el reconocimiento de organizaciones no gubernamentales (ONGs); violencia y discriminación contra la mujer; prostitución y abuso infantil; trata de personas; discriminación contra comunidades indígenas; violencia y discriminación contra personas debido a su orientación sexual; falta de una efectiva aplicación de las leyes laborales; y trabajo infantil.

RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 El Respeto por la Integridad de la Persona, Incluyendo la Libertad de:

a. Privación Arbitraria o Ilegal de la Vida

Hubo informes que el gobierno o sus agentes fueron responsables de cometer ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales. Como ha sucedido en años anteriores, ONGs reportaron asesinatos de jóvenes y niños por grupos clandestinos que podrían haber incluido la participación de miembros de las fuerzas de seguridad. No se presentaron acusaciones o se ha condenado a persona alguna en relación con estos asesinatos. Entre 1998 y finales de año, la ONG Casa Alianza reportó que 3,943 niños y adultos menores de 23 años fueron asesinados, de los cuales 504 ocurrieron durante el año. Casa Alianza consideró que fuerzas de seguridad gubernamentales estaban implicadas en 22 de estos asesinatos; algunas víctimas mostraron signos de tortura.

El gobierno buscó o detuvo a una cantidad de oficiales de policía por su participación en los asesinatos de varias personas.

El 22 de junio, desconocidos le dispararon y asesinaron al Capitán del ejército Alejandro Humberto “El Motiño” Zavala, un amigo cercano y guardaespaldas del Presidente Zelaya, en Tegucigalpa. El presidente afirmó que “grupos de poder” habían perpetrado un asesinato político contra el país. Grupos de derechos humanos comentaron que no existían evidencias para confirmar la afirmación del presidente. Hasta finales de año, las autoridades de seguridad habían arrestado a dos sospechosos, Edwin Ernesto Hernández y Hansen Mohamed Handal.

El 18 de octubre, desconocidos hirieron fatalmente al periodista de Radio Cadena Voces Carlos Salgado (ver la Sección 2.a).

El 29 de noviembre, desconocidos hirieron fatalmente al Presidente Regional de la Cruz Roja José Raúl Carranza Soto en Puerto Cortés, presumiblemente porque él se negó a pagarles dinero por extorsión. A finales de año, no existía ninguna información sobre investigación alguna de este incidente.

No se informó sobre progreso alguno en relación a la acción legal pendiente en contra de un soldado que se encontraba bajo custodia militar, por el asesinato en octubre de 2006 de un civil, Henry Esaú García Fuentes, durante un operativo conjunto entre el ejército y la policía en la Colonia Flor del Campo.

El 28 de mayo, las autoridades colocaron bajo arresto domiciliario al ex oficial de policía de Comayagua Marvin Arias Sorto en conexión con el asesinato en noviembre de 2006 del dueño de un bar Sean Keith Haneman. A finales de año, Sorto permanecía bajo arresto domiciliario.

No hubo progreso alguno en relación a la presentación de una acusación criminal en diciembre de 2006 en contra de cuatro miembros de la policía preventiva por los asesinatos de los ambientalistas Heraldo Zúniga y Roger Iván Cartagena en Olancho. En febrero, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y el Ministerio Público se preguntaron si oficiales de policía habían recibido órdenes de sus superiores de alterar la escena del crimen en contra de los ambientalistas.

El 1 de noviembre, autoridades de seguridad liberaron de su custodia a los ex oficiales de policía Ricardo Benítez y Felipe Izaguirre después que un juzgado los encontrara inocentes de los cargos relacionados con el secuestro, tortura y asesinato de los jóvenes René David Rivera y Sergio Najarro Ramírez en 2005.

En junio, un tribunal sentenció al ex inspector de la Policía Preventiva, Óscar Gómez, y al ex subinspector Roger Matute a 47 y 26 años en prisión, respectivamente, por las muertes de las víctimas juveniles Marvin Daniel Ortiz y Juan Manuel Aguilar en 2004.

Cierta cantidad de muertes de prisioneros fueron atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad.

A finales de año no hubo ningún progreso en relación al asesinato por parte de desconocidos del diputado por el Partido Liberal Ramón Salgado Cuevas en mayo de 2006. Las autoridades consideraron que un grupo del crimen organizado fue responsable de este asesinato.

A finales de año, la Unidad de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de Comayagua continuaba investigando el asesinato del dirigente sindical Francisco Cruz Galeano en 2005.

A finales de año, la policía continuaba investigando el asesinato del funcionario del Ministerio de Obras Públicas José Mario García en 2005.

El 4 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó por segunda vez la detención del coronel retirado Alexander Hernández Santos, miembro del desaparecido Batallón de Inteligencia 3-16, por violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, y el asesinato de 184 personas durante la década de los ochentas, incluyendo los asesinatos de Miguel Francisco Carías y Nelson McKay Chavarría.

A finales de año, el tribunal criminal de Tegucigalpa aún no había procedido contra los oficiales de policía involucrados en la detención ilegal y el asesinato de cuatro jóvenes en el caso de los cuatro puntos cardinales en 1995. Como parte de la condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el manejo gubernamental de este caso en septiembre de 2006, el servicio postal emitió

una estampilla conmemorativa en diciembre. El 12 de noviembre, el gobierno inauguró el “Puente de los Cuatro Puntos Cardinales” en Tegucigalpa para recordar este incidente.

El 11 de junio, el líder garífuna Félix Ordóñez Suazo fue herido fatalmente en Punta Piedras, departamento de Colón, presumiblemente por miembros de un grupo de invasores de tierras que estaban usurpando tierras comunitarias.

Hasta noviembre, el Ministerio de Seguridad Pública informó que desconocidos habían asesinado a 43 oficiales de policía, señalando que pandillas juveniles podrían haber cometido algunos de estos crímenes.

Hasta diciembre, cinco abogados y un juez habían sido asesinados, incluyendo al fiscal Alejandro Arturo Navas.

La criminalidad violenta continuó alentando el crecimiento de servicios de vigilancia privados que no cuentan con el permiso respectivo de las autoridades y de grupos clandestinos que patrullan vecindarios y municipios para supuestamente prevenir el crimen. Los grupos de vigilancia comunitaria, conocidos como Consejos de Seguridad Ciudadana ocasionalmente han aplicado la ley por sus propias manos. De manera creíble, organizaciones de derechos humanos señalaron que algunos Consejos, así como empresas de seguridad privada con enlaces con oficiales militares o policiales activos o retirados, actuaron con la complicidad de la policía como grupos de seguridad clandestinos o escuadrones de la muerte para eliminar a presuntos criminales habituales. El 21 de junio, uno de los principales periódicos publicó una hoja volante de un supuesto “Escuadrón de la Muerte” conformado por policías, militares y empresarios. También en junio, una persona desconocida le entregó esta hoja volante, en donde se amenazaba a los defensores de los derechos humanos de pandilleros y narcotraficantes, a un activista de derechos humanos en una calle en Tegucigalpa.

Casa Alianza reportó un considerable número de asesinatos de adolescentes en áreas urbanas. Aproximadamente el 90 por ciento de las víctimas fueron hombres; las víctimas femeninas mostraban signos de abuso sexual. Se creía que grupos del crimen organizado y fuerzas de seguridad privadas estaban implicados en muchos de estos asesinatos. Esta ONG también contaba con información que algunos oficiales en condición de personas particulares, no como agentes del orden público, participaron en muchos de estos asesinatos, disfrutando de un “ambiente de impunidad” a consecuencia de la opinión pública que favorecía la aplicación de una estrategia de “limpieza social” hacia presuntos miembros de pandillas y otros jóvenes sospechosos de participar en actividades criminales.

Entre enero y septiembre, la Unidad Especial de Investigaciones de Muertes de Menores recibió casos que involucraban el asesinato de 80 menores; esta unidad clasificó a los responsables de estos asesinatos en las siguientes categorías: asaltantes desconocidos (57 por ciento), miembros de pandillas (30 por ciento), personas particulares, familiares y delincuentes (12 por ciento), y policías (1 por ciento).

El CONADEH informó que 189 mujeres fueron asesinadas durante el año, y que el 98 por ciento de estos crímenes permanecieron sin resolver.

Diversos grupos y familiares de víctimas juveniles afirmaron haber proporcionado a los fiscales públicos evidencias de colusión entre elementos de la policía y líderes empresariales. El Ministerio de Seguridad Pública señaló que había investigado a algunos oficiales de policía por su participación en los asesinatos de jóvenes en la calle; sin embargo, no existió información disponible sobre el resultado de las investigaciones. ONGs internacionales, incluyendo a CARE, y cooperantes de gobiernos extranjeros continuaron facilitando capacitaciones sobre violencia doméstica y otros problemas de derechos humanos para la policía y unidades de las fuerzas armadas.

b. Desapariciones

El 31 de agosto, se informó que un ex oficial de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) había secuestrado a Milton Elías Cardona desde su hogar en Siguatepeque, Comayagua. A finales de año, el paradero de Cardona continuaba siendo desconocido.

No existió información sobre el paradero de los ciudadanos panameños José Camilo Miranda, David Rodrigo Villalobos Valladares, y Jorge Luis Villalobos Valladares, quienes fueron vistos por última vez bajo custodia de la policía de Roatán en junio de 2006.

No hubo información en relación a investigación alguna sobre el secuestro y desaparición de Jorge Ruiz Rosales, ex asesor de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras en junio de 2006, presuntamente perpetrado por cinco agentes de la DGIC. Rosales se había exiliado voluntariamente durante los ochentas debido a su activa participación en organizaciones políticas disidentes, pero había retornado al país en 1991 cuando el gobierno emitió un decreto de amnistía incondicional para ex disidentes.

No existió información sobre el paradero de Elvis Zepeda Barrientos, quien fue detenido por la policía en diciembre de 2006.

El gobierno resolvió ocho casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionados con las desapariciones forzadas durante los ochentas y entregó una compensación de \$600,000 (11.3 millones de Lempiras) para los familiares de la víctimas.

El Ministerio de Seguridad Pública reportó que, hasta noviembre, se habían producido 40 secuestros para el pago de rescate, en comparación con 14 en 2006.

c. Tortura y Otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes

A pesar que la Constitución y la ley prohíben tales prácticas, hubo ocasiones en donde oficiales gubernamentales las utilizaron, incluyendo golpizas por parte de la policía y otros abusos a personas detenidas.

Personal legal de Casa Alianza investigó dos casos de presunta brutalidad policial contra menores. El 23 de marzo, oficiales de la policía preventiva presumiblemente asaltaron a los menores Luis Sander Gómez Salgado y Dawin Sevilla. El 20 de junio, agentes de la DGIC presuntamente detuvieron de forma ilegal y abusaron del menor Josué Armando Turcios.

En agosto, Marvin Javier Martínez Bermúdez y José Santiago López Villalobos afirmaron que autoridades de seguridad los torturaron para confesar que ellos habían asesinado a la Juez Alba Leticia Bueso en San Pedro Sula. Las autoridades procesaron a Martínez y a López por los delitos de homicidio premeditado, asociación ilícita y portación ilegal de armas. A finales de año, no hubo progresos adicionales con respecto a este caso.

El 13 de diciembre, el Ministerio Público procesó a cinco oficiales de la policía por los delitos de tortura y detención ilegal de varios miembros de la ONG Asociación Lésbica Gay Arco Iris de Comayagüela.

El 28 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia confirmó su veredicto de 2004 de otorgar la libertad bajo fianza y el retiro de los cargos en contra del coronel retirado Juan Evangelista López Grijalba en relación a la sentencia de un tribunal extranjero que lo encontró responsable de daños compensatorios y punitivos por los delitos de tortura, desaparición y ejecuciones extrajudiciales en marzo de 2006.

La ONG Centro para la Prevención y Rehabilitación de la Tortura (CPTRP) y el partido político de Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata se quejaron que funcionarios de la penitenciaría requirieron que las mujeres que visitaron las prisiones tuvieran que desvestirse y experimentar revisiones físicas en presencia de funcionarios penitenciarios de sexo masculino para poder ingresar a la Penitenciaría Nacional.

El 18 de marzo, las autoridades de seguridad detuvieron sin presentar ningún cargo por varias horas en una estación policial de Comayagüela a Donny Reyes, una persona travesti miembro de la Asociación Lésbica Gay Arco Iris de Comayagüela. Durante el período que permaneció recluido, presuntamente otros detenidos asaltaron físicamente y violaron a Reyes con el estímulo de oficiales de policía. No existió información sobre alguna investigación de seguimiento sobre este incidente.

Condiciones de las Prisiones y Centros de Detención

Las condiciones en las prisiones fueron deplorables y su seguridad fue deficiente. Grupos de derechos humanos informaron que los prisioneros sufrieron de un severo hacinamiento, desnutrición, y falta de salubridad adecuada y presumiblemente fueron sujetos a diversos tipos de abuso, incluyendo violaciones cometidas por otros presidiarios. En muchos casos, los prisioneros dependieron de la ayuda de visitantes del exterior para sobrevivir, debido a que el sistema de prisiones no proporcionó la alimentación adecuada o no pudo satisfacer otras necesidades básicas. La fuga de prisioneros, a través de sobornos u otros medios, continuó siendo frecuente. El CPTRP encontró que, de 72 presidiarios que entrevistó en la Penitenciaría Nacional y en la Granja Penal de Comayagua, 68 de ellos admitieron haber sido objeto de abuso físico o emocional de parte de las autoridades.

Los disturbios en las prisiones, causados principalmente por las condiciones inhumanas de las penitenciarías o por la violencia entre pandillas, ocurrieron en las prisiones más grandes de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Choluteca. Hasta noviembre, el Ministerio de Seguridad Pública informó que 18 pandilleros habían sido asesinados en prisión, en la mayor parte de los casos por miembros de pandillas rivales.

Las autoridades carcelarias intentaron albergar a los prisioneros de pandillas rivales en diferentes instalaciones o en diferentes áreas de la misma prisión para reducir las tensiones y violencia entre pandillas. El 28 de diciembre, cuatro prisioneros miembros de una pandilla rival asesinaron a otros cuatro presidiarios en la Penitenciaría Nacional, haciendo que el total de prisioneros asesinados en estas instalaciones llegara a 41 hasta finales de año.

Personas con enfermedades mentales, así como otros con tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, fueron alojados conjuntamente con la población general de las cárceles. Organizaciones de derechos humanos acusaron a oficiales de prisiones de usar fuerza excesiva en contra de los presidiarios, incluyendo golpizas, así como también aislamiento y amenazas. Existieron informaciones creíbles que sostuvieron que oficiales de seguridad permitieron que presidiarios homosexuales fueran violados o sujetos a otro tipo de asaltos físicos (ver la Sección 5).

Las mujeres prisioneras generalmente fueron recluidas en instalaciones separadas bajo condiciones similares a las experimentadas por los hombres, pero ellas no disfrutaron del privilegio de recibir visitas conyugales como sucedió con los hombres. En algunas prisiones de baja seguridad, las mujeres fueron recluidas con la población general. A los niños se les permitió convivir con sus madres en la cárcel hasta la edad de dos años. Habitualmente, las mujeres en detención preventiva previa a su juicio fueron recluidas con prisioneras convictas.

Aunque el gobierno cuenta con cuatro centros de detención juvenil, en algunas ocasiones menores de edad fueron recluidos con adultos.

El hacinamiento continuó siendo un problema debido a las deficiencias en términos generales del sistema penal para juveniles. Los jueces se inclinaron a enviar a los menores a centros de detención en ausencia de otros programas educativos o de rehabilitación.

Generalmente, el gobierno permitió visitas a las prisiones de parte de observadores independientes de derechos humanos nacionales e internacionales, y estas visitas ocurrieron durante el año.

d. Arresto o Detención Arbitraria

La Constitución y la ley prohíben el arresto y detención arbitraria, pero las autoridades ocasionalmente no acataron estas prohibiciones.

El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) estimó que hasta diciembre, oficiales de seguridad habían arrestado arbitrariamente, y algunas veces torturado, a más de 34,000 personas bajo el programa gubernamental Operación Nación. La policía arrestó a personas en base a su forma de vestir, tipo de tatuajes, y si las personas portaban o no documentos de identificación.

Papel de la Policía y el Aparato de Seguridad

El Ministerio de Seguridad Pública supervisa las operaciones policiales, incluyendo las de la Policía Preventiva, la DGIC, la Policía de Tránsito, la Policía de Fronteras, la Policía Turística, y la Policía Penitenciaria. La corrupción y la impunidad fueron problemas serios al interior de las fuerzas de seguridad. La falta de suficiente financiamiento para la DGIC limitó su efectividad. La policía incorporó a 2,000 oficiales, descentralizó algunos comandos policiales, e inició la aplicación de pruebas poligráficas para todos los aspirantes a ingresar a la academia de policía. El Ministerio de Seguridad Pública aumentó la utilización de patrullas motorizadas para responder de manera más efectiva a las solicitudes de asistencia de parte de la población.

La Oficina de Asuntos Internos investiga denuncias de actividades ilegales cometidas por miembros de la policía. Tanto la Policía Preventiva como la DGIC cuentan con una Oficina de Responsabilidad Profesional que realizan revisiones internas de conducta inadecuada de policías.

El 29 de octubre, las autoridades de seguridad detuvieron a dos agentes de la DGIC y a su conductor por haber hurtado 15 computadoras ese mismo día de una escuela en Olancho. A finales de año, no hubo información adicional sobre este incidente.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que hasta noviembre, las autoridades habían procesado a 63 oficiales de policía por diversas ofensas, desde abuso de autoridad hasta narcotráfico, violación y homicidio. En general, hubo preocupación pública debido a la percepción de incapacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir y controlar el crimen, y los ciudadanos continuaron creyendo que personal corrupto de las fuerzas de seguridad eran cómplices del alto índice de criminalidad.

El 23 de octubre, el gobierno anunció la creación de una nueva oficina de la fiscalía, integrada por cinco fiscales, para el procesamiento de los homicidios en San Pedro Sula y para manejar el considerable número de casos retrasados sin resolver.

Cooperantes internacionales y organizaciones internacionales proporcionaron capacitaciones sobre derechos humanos para oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas.

El gobierno aprobó las acciones de los Consejos de Seguridad Ciudadana, los cuales fueron acusados por grupos de derechos humanos de ser responsables del aumento de los asesinatos ilegales. Grupos de derechos humanos afirmaron que estos Consejos eran entidades de inteligencia policial que recopilaban información sobre personas que no apoyaban a la administración Zelaya, y que el gobierno estaba instituyendo un Estado policial.

No hubo progreso en cuanto a los casos pendientes en el Ministerio Público desde 2006 que involucraban a inspectores y directores de la policía acusados de flagrantes abusos de derechos humanos.

La policía y efectivos militares continuaron patrullando las calles en forma conjunta. La violencia y la intimidación por parte de pandillas continuaron siendo un problema serio, y las pandillas continuaron intimidando, amenazando, y asaltando a los pasajeros del transporte público, lo que provocó que el gobierno asignara a oficiales de seguridad en muchas de las unidades del transporte público. Los responsables de asesinatos contra jóvenes y menores de edad, incluyendo en algunos casos a la policía, continuaron actuando con impunidad.

Arresto y Detención

La ley estipula que la policía puede arrestar a una persona solamente con una orden judicial, a menos que el arresto se realice por orden de un fiscal, o durante la comisión de un crimen, o si existe una fuerte sospecha que una persona ha cometido un delito y que quiera intentar evadir la persecución criminal, o si es atrapado con evidencias relacionadas con la comisión de un crimen. La policía debe informar claramente a la persona sobre los motivos de su arresto. La policía debe presentar a un detenido ante una autoridad competente dentro de un plazo de 24 horas. El fiscal tiene 24 horas para decidir si existe causa probable para realizar un proceso judicial, y después un juez tiene 24 horas para determinar si emite una orden de detención temporal que puede tener vigencia de hasta seis días, y posteriormente el juez debe realizar una audiencia preliminar para examinar los motivos de causa probable y para tomar una decisión sobre si debe continuar la detención preliminar. La ley establece que los delitos mayores son fiables. La ley también determina que los detenidos pueden ser visitados de inmediato por sus familiares. A pesar que la ley establece que los prisioneros deben tener acceso inmediato a un abogado de su elección, y que el Estado puede sufragar los gastos legales de los prisioneros que no puedan pagarlos, estos requerimientos no siempre han sido implementados en la práctica.

Los prolongados períodos de detención preliminar fueron un problema serio. Durante el año, aproximadamente un 51 por ciento de la población penitenciaria todavía esta esperando juicio. La ley ordena la liberación de cualquier detenido cuyo caso no haya sido llevado a juicio y cuyo tiempo de detención haya excedido el término de sentencia máxima del crimen del cual se acusa. La ineficiencia y corrupción judicial y la falta de recursos suficientes retrasó los procesos en el sistema de justicia criminal. De acuerdo con datos proporcionados por la Corte Suprema de Justicia, de 271,000 casos registrados con el Departamento de Investigación Criminal (DGIC), solo 6,000 llegaron a juicio. Sin embargo, de los 6,000 casos mencionados, el 80 por ciento fueron sentenciados. Como resultado de estos retrasos, muchas personas en detención preventiva ya habían estado en prisión en términos equivalentes a la máxima condena que hubieran recibido por el crimen del cual fueron acusados. Muchos prisioneros permanecieron en la cárcel después de haber sido absueltos o de haber completado sus sentencias, debido a que los oficiales responsables no procesaron su liberación.

e. Negación de Juicio Público Justo

A pesar que la Constitución y la ley garantizan la existencia de un Poder Judicial independiente, el sistema de justicia sufrió de un déficit de financiamiento, equipo y personal, que generalmente es ineficiente y vulnerable al clientelismo, corrupción e influencias políticas.

El 27 de marzo, una corte dejó sin valor el caso pero no dejó libre a Joel Nahún Espinoza, miembro de la Guardia Presidencial que fuera arrestado en junio del 2006 en conexión con el asesinato en 1999 de Francisco Javier Morales en Trujillo. El 30 de abril, la fiscalía introdujo una apelación, que aún estaba pendiente de resolución al final del año. Santos Israel Barahona Chirinos, el segundo sospechoso en el asesinato permanece prófugo de la justicia.

Los bajos sueldos y la falta de controles internos provocaron que los funcionarios judiciales fueran susceptibles a sobornos, y poderosos intereses específicos ejercieron influencia en los resultados de los juicios.

Existen 12 cortes de apelaciones, 77 cortes de primera instancia con jurisdicción general, y 330 juzgados de paz con jurisdicción limitada. La Corte Suprema nombra a todos los jueces de los tribunales de menor jerarquía. Los medios de comunicación y diversas organizaciones de sociedad civil continuaron expresando su preocupación que la división de 8 magistrados nacionalistas y 7 liberales resultó en la politización de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y contribuyó a la corrupción en las instituciones públicas y privadas.

Procedimiento de los Juicios

La ley establece el derecho a un juicio público justo. A pesar que la ley determina que se presume la inocencia de una persona acusada, y que tiene derecho a una audiencia preliminar ante un juez, a gozar de libertad bajo fianza, a contar con asesoría legal a la brevedad posible, a tener un abogado proporcionado por el Estado si es necesario, así como el derecho a apelar, estos derechos frecuentemente no fueron observados.

Aunque la ley dispone que un caso no puede continuar si el sospechoso no cuenta con representación legal, el gobierno asignó una mínima cantidad de recursos para el programa de defensores públicos. Como resultado, los defensores públicos no fueron capaces de satisfacer la demanda de asesoría legal para aquellos que no podían costear su representación.

Prisioneros y Detenidos Políticos

No hubo informes sobre la existencia de prisioneros o detenidos políticos.

Procedimientos y Resoluciones Civiles y Judiciales

Existe un juzgado independiente e imparcial para asuntos civiles, que incluye el acceso a un tribunal para solicitar retribución por daños y perjuicios a consecuencia de una violación de derechos humanos. No existieron reportes de este tipo de casos durante el año.

CODEH y COFADEH fueron las dos únicas organizaciones que presentaron acusaciones contra violadores de derechos humanos solicitando retribución financiera. Esto puede realizarse cuando el tribunal establece que dicha retribución puede ser solicitada.

f. Interferencia Arbitraria con la Privacidad, la Familia, el Hogar, y la Correspondencia

Si bien la Constitución y la ley generalmente prohíben tales acciones, una excepción legal permite que las autoridades puedan ingresar a un domicilio en cualquier momento en casos de emergencia o para prevenir la comisión de un delito. Continuaron existiendo denuncias fundamentadas que en algunas ocasiones las fuerzas policiales no obtuvieron la autorización requerida antes de ingresar a un domicilio particular.

Líderes garífunas y de otros grupos indígenas continuaron denunciando que el gobierno no rectificó las acciones previas de fuerzas de seguridad públicas y privadas que desalojaron a campesinos y grupos indígenas que reclamaban la propiedad de tierras, basándose en las leyes de reforma agraria o en títulos de propiedad ancestrales (ver la Sección 5).

Sección 2 Respeto a las Libertades Civiles, Incluyendo:

a. Libertad de Expresión y de Prensa

A pesar de que la Constitución y la ley generalmente garantizan la libertad de expresión y de la prensa, se produjeron casos de intimidación en contra de algunos miembros de la prensa por parte del gobierno y se propició la autocensura de la prensa. La ley restringe a manifestantes del uso de expresiones que pudieran incitar a las personas al desorden.

Algunos miembros de la prensa admitieron haber practicado la autocensura cuando sus informes pudieron amenazar los intereses políticos o económicos de los propietarios de los medios de comunicación. No se reportó que la prensa internacional haya sido objeto de restricciones para poder operar libremente.

Un reducido número de poderosos empresarios y magnates con intereses empresariales, políticos y familiares interconectados son dueños de la mayoría de medios de comunicación del país. El gobierno influyó la cobertura de sus actividades de parte de los medios de comunicación mediante acciones para permitir o denegar el acceso a funcionarios públicos, creando una situación en la cual los medios estaban tan estrechamente interrelacionados y enlazados con el sistema político que los poderosos magnates influenciaron decisivamente la agenda de las noticias, y de esa manera, las elecciones y las decisiones políticas.

Organizaciones no gubernamentales informaron que el gobierno otorgó cantidades sustanciales de dinero a selectos miembros de la prensa para cubrir sus noticias bajo los ángulos que ellos determinaran. El gobierno ejerció una considerable influencia en los medios escritos mediante el otorgamiento o retiro de los anuncios oficiales pagados con fondos públicos.

Los medios de comunicación continuaron sufriendo corrupción interna, politización, e influencias externas. ONGs consideraron que algunos ministros y altos funcionarios del gobierno aseguraron el silencio de la prensa mediante la contratación de periodistas como asistentes de relaciones públicas con altos salarios o pagando a periodistas para investigar o suprimir ciertos reportajes.

Algunos miembros de los medios de comunicación señalaron que cuando intentaron realizar investigaciones a fondo sobre políticos nacionales o sobre actos de corrupción oficial, en algunas ocasiones se les negó el acceso a información oficial. El acceso a Casa Presidencial fue restringido exclusivamente para la prensa “amistosa” y fue otorgado o denegado arbitrariamente, por personal de la Casa Presidencial.

El Comité de la Libertad de Expresión informó que para finales de año, once miembros de la prensa fueron objeto de amenazas e intimidación.

En el mes de febrero personas desconocidas amenazaron las vidas de dos periodistas del diario La Tribuna cuando se encontraban investigando irregularidades administrativas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El 23 de mayo, el presidente Zelaya ordenó la realización de cadenas televisivas y radiales obligatorias. Dichas cadenas, de treinta minutos y hasta de una hora de duración, comenzaron a realizarse el 28 y 30 de mayo y el 1 de junio; la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras por lo general permite solo siete minutos de transmisión gubernamental que no sea en situaciones de emergencia a la vez. El presidente defendió las cadenas informativas dirigidas a contrarrestar la cobertura negativa de la prensa.

Se reportaron numerosas amenazas o demandas legales por parte de personas poderosas contra periodistas, incluyendo acusaciones legales contra periodistas por reportar sobre casos de corrupción. ONGs afirmaron haber recibido amenazas diversas, incluyendo ciertas provenientes del crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa del 30 de agosto en su oficina, el presidente Zelaya rechazó una solicitud de entrevista por parte de un periodista de Radio Cadena Voces y contestó que, “bajo ninguna circunstancia le daría a su estación de radio una entrevista, y si fuera Hugo Chávez, la cerraría de una vez”.

El 27 de septiembre, Marcelo Chimirri, director de Hondutel (la compañía nacional de telecomunicaciones) levantó cargos de difamación en contra de seis renombrados periodistas, basándose en transmisiones de radio realizadas en México sobre reportajes de supuesta corrupción en Hondutel. Al final del año la corte de lo criminal había desvanecido los cargos. Periodistas sin Fronteras aseguraron que Chimirri inició la demanda con el fin de debilitar la libertad de prensa.

El 15 de octubre, el presidente Zelaya criticó a los medios de comunicación hondureños durante su comparecencia en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa que se realizó en Miami, Florida.

El 18 de octubre, autores desconocidos asesinaron al periodista Carlos Salgado de Radio Cadena Voces frente a las instalaciones de la estación de radio en Tegucigalpa en el momento en que el periodista se disponía a salir de su estudio, después de grabar los programas de radio. Durante el año Salgado y otros periodistas de Radio Cadena Voces habían solicitado protección policial por encontrarse amenazados a muerte. Días antes a la muerte de Salgado, el director de Hondutel, Marcelo Chimirri, criticó públicamente a los coordinadores de noticias de Radio Cadena Voces, Melisa Amaya y Juan Carlos Funes. El 27 de octubre la policía arrestó a German David Almendarez por considerarlo sospechoso en la muerte de Salgado. Los medios informaron que la muerte de Salgado fue motivada por razones políticas. Como respuesta al asesinato de Salgado, CONADEH aseveró que el gobierno estaba empleando tácticas terroristas para amenazar a la prensa y a los defensores de los derechos humanos. El Relator Especial para la Libertad de Prensa de las Naciones Unidas así como la Organización de Estados Americanos condenaron el asesinato de Salgado e instaron al gobierno para llevar a los responsables a la justicia.

El 1 de noviembre, Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, salió huyendo del país debido a las amenazas a muerte que recibió por parte de desconocidos. Después de haber sido blanco de disparos por parte de dos personas que se conducían en una motocicleta, el 7 de septiembre, el periodista radial, Héctor Geovany García también abandonó el país. El 18 de septiembre, CONADEH solicitó medidas preventivas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los periodistas Héctor Geovany García y Martín Omar Ramírez, por haber sido objeto de múltiples amenazas a muerte. En el mes de noviembre el presidente del Colegio de Periodistas, Elán Reyes Pineda, exigió al gobierno medidas de protección para los periodistas amenazados.

El 18 de octubre, personas desconocidas hicieron públicas en el sitio de Internet YouTube.com, grabaciones ilegales conteniendo amenazas por parte de la administración en contra de la prensa. El 9 de noviembre, las autoridades arrestaron a Marcelo Chimirri por publicar las grabaciones mencionadas. Al final del año, el fiscal continuaba investigando el caso.

El 30 de diciembre, la policía en Tegucigalpa arrestó al Secretario de Relaciones Exteriores, Milton Jiménez Puerto, acusándolo de manejar bajo la influencia del alcohol y lo condujeron a la posta de la policía donde el Abogado Jiménez Puerto y las autoridades policiales se fueron a los puños. Personas desconocidas grabaron y transmitieron en YouTube.com partes del video policial en el cual se podía observar claramente el altercado entre el Secretario de Relaciones Exteriores y efectivos de la policía. La prensa supuestamente no cubrió el incidente, debido a las amenazas de las que había sido objeto por parte del gobierno, hasta después de que se publicó en vivo en el Internet. Al final del año el fiscal de los derechos humanos continuaba realizando las investigaciones del caso.

No existió información sobre el caso pendiente de proceso judicial contra los periodistas Eduardo Maldonado y David Romero Ellner, acusados en julio de 2006 por difamación y calumnia en perjuicio de Mario Maldonado, ex director de Hondutel.

Libertad de Internet

No existieron restricciones gubernamentales sobre el acceso al Internet o informes que el gobierno monitoreó la utilización de correo electrónico o de sitios de chat. Personas particulares y grupos pudieron tomar parte en una pacífica expresión de opiniones por medio del Internet, incluyendo el correo electrónico. En enero se produjeron apagones extensos del Internet en Islas de la Bahía debido a la interferencia del gobierno en contra de los pequeños operadores.

Libertad Académica y Eventos Culturales

No existieron restricciones gubernamentales sobre la libertad académica o sobre eventos culturales.

b. Libertad de Reunión y Asociación Pacífica

Libertad de Reunión

La Constitución y la ley garantizan la libertad de reunión, y el gobierno generalmente respetó este derecho.

Libertad de Asociación

La Constitución y la ley generalmente garantizan la libertad de asociación, y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica; sin embargo, la ley de asociaciones criminales prohíbe la asociación ilícita y establece términos de prisión de entre 3 y 12 años (ver la Sección 5). Organizaciones de Derechos Humanos señalaron que esta ley y su aplicación consistían en una restricción excesiva al derecho de libre asociación, mientras que grupos que promueven los derechos de los homosexuales expresaron su preocupación que esta ley pudiera ser utilizada para criminalizar las actividades sociales y las organizaciones de la comunidad homosexual. Durante el año, la ley que prohíbe las asociaciones ilícitas fue empleada para arrestar a individuos por ser miembros de la Mara Salvatrucha y otras pandillas. La reforma al Código Penal que prohíbe la asociación ilícita, fue utilizada por el gobierno para perseguir a campesinos y a miembros de comunidades indígenas.

c. Libertad de Religión

La Constitución y la ley garantizan la libertad de religión, y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica. El gobierno requiere que misioneros extranjeros obtengan permisos de ingreso y de residencia en el país, y permite la deportación de misioneros extranjeros que practican religiones que utilicen brujería o rituales satánicos. Aunque el gobierno no requiere el registro de grupos religiosos, aquellos que reciben el status de “personería jurídica” pueden recibir exenciones fiscales y dispensas por el pago de aranceles de importación.

En abril el gobierno negó la entrada a su territorio a José Luís Miranda, quien se autodenominó el “Anticristo”, por considerarlo un riesgo a la seguridad nacional.

Abusos de la Sociedad y Discriminación

No se conocieron informes de discriminación o de violencia contra grupos religiosos, incluyendo acciones antisemitas. Existió una pequeña población judía.

Para una discusión más detallada, vea el *Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006*.

d. Libertad de Movimiento Dentro del País, Viajes al Exterior, Emigración y Repatriación

La Constitución y la ley proveen la libre asociación y la libertad de asamblea; el gobierno generalmente respetó esta práctica.

La ley no prohíbe explícitamente el exilio forzado nacional o internacional, pero el gobierno no utilizó esta práctica durante el año.

Protección de Refugiados

La ley garantiza la provisión de la condición de asilo o refugio de acuerdo con la Convención Relacionada con el Estatus de los Refugiados de la ONU de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema para la protección de refugiados. En la práctica, el gobierno facilitó protección contra el rechazo, el retorno de personas a un país donde temían sufrir persecución, y proporcionó el estatus de refugio y asilo. Durante el mes de diciembre, la Oficina de Migración continuó considerando las 19 aplicaciones para estatus de refugiados que recibió a lo largo del año. El gobierno cooperó con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la Organización Internacional para las Migraciones, y con otras organizaciones humanitarias para brindar asistencia a refugiados y para personas que buscaban asilo.

Sección 3 Respeto a los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Renovar Su Gobierno

La Constitución y la ley garantizan a los ciudadanos el derecho a renovar su gobierno pacíficamente, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica por medio de elecciones periódicas, libres y justas realizadas sobre la base de un sufragio casi universal. Los miembros activos del clero, y de las fuerzas armadas y de las fuerzas civiles de seguridad no tienen derecho a votar.

Elecciones y Participación Política

En las elecciones nacionales de noviembre de 2005, que fueron consideradas por observadores internacionales como generalmente libres y justas, José Manuel Zelaya Rosales del Partido Liberal ganó las elecciones para la presidencia por una mayoría de votos. Los observadores percibieron irregularidades

en aproximadamente 1,100 urnas electorales, pero ningún patrón sistemático de fraude. Los partidos políticos pudieron operar sin restricciones y sin interferencia externa.

Las mujeres participaron activamente en política. Se registraron 31 mujeres electas como diputadas en un Congreso que cuenta con 128 miembros; se reportaron seis mujeres miembros en la Junta Directiva del Congreso; 10 mujeres presidieron comités del Congreso Nacional; de los 256 miembros totales del Congreso Nacional, tanto propietarios como suplentes, 58 fueron mujeres. Ocho de los 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia, incluyendo su Presidenta, fueron mujeres; cuatro mujeres fueron secretarías de estado y tres fueron viceministras.

Existieron muy pocas personas miembros de minorías étnicas o indígenas ocupando posiciones de liderazgo en el gobierno o en política. Hubo 3 miembros de la etnia Garífuna como diputados en un Congreso de 128 miembros propietarios, pero no hubo representación de otras minorías étnicas o comunidades indígenas.

Corrupción y Transparencia Gubernamental

La ley provee penas criminales para los actos de corrupción, sin embargo, el gobierno no implementó la ley correctamente, y los empleados públicos continuaron realizando actos de corrupción con impunidad. Los poderes ejecutivo y judicial fueron sujetos a actos de corrupción e influencias políticas. Se mantuvo la percepción que las instituciones gubernamentales para combatir la corrupción no dieron los pasos necesarios para combatir efectivamente la corrupción, no tuvieron el interés en hacerlo, o carecieron de la capacidad profesional para investigar, arrestar y procesar a aquellos involucrados en actos de corrupción de alto nivel. Los indicadores de gobernabilidad global del Banco Mundial reflejaron a la corrupción como un severo problema en el país.

Muchos observadores afirmaron que una pequeña elite ejercía un control considerable sobre las instituciones económicas, judiciales y políticas del país, lo que dio lugar a potenciar el abuso de las instituciones del país y de la gobernabilidad democrática.

En junio una corte falló en contra de Ramón Romero, ex director de la Dirección de Migración y Extranjería, arrestado por cargos de corrupción en el 2005, por abuso de autoridad. Al final del año Romero no había sido detenido pero si había apelado su caso.

En enero una coalición liderada por el Consejo Nacional Anticorrupción y apoyado por el gobierno organizó a 30,000 personas para protestar la corrupción y la impunidad. Varias personas se quejaron de la corrupción, el tráfico de influencias, y el nepotismo registrados en la Secretaría de Salud, en las oficinas de la ENEE y el SANAA, Hondutel, el Fondo Vial y la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).

En octubre, Fernando García, el Comisionado para la Estrategia de la Reducción de la Pobreza, denunció a trece alcaldes por mala utilización de los fondos de la reducción de pobreza, recursos provenientes de países cooperantes para alivio de deuda. Al final del año el Tribunal Superior de Cuentas realizaba investigaciones sobre el caso.

El 11 de octubre, el Ministerio Público acusó al ex alcalde de Tegucigalpa, Óscar Acosta, y a su regidor Benjamín Talavera de adquirir tierras a un precio sobrevaluado sin realizar el proceso de licitación requerido. Al final del año, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público había iniciado un proceso en contra de Acosta y Talavera.

El 29 de octubre, el fiscal anticorrupción Walter Ramírez anunció que estaba investigando al Registro Nacional de las Personas (RNP) por realizar cobros indebidos a las personas por trámites de certificados de nacimiento y tarjetas de identidad en la ciudad de San Pedro Sula. La investigación aún continuaba a finales de año.

A finales de año, Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional ofreció protección a la diputada Marleni Paz del Partido Demócrata Cristiano, debido a múltiples amenazas recibidas por ella de parte de desconocidos por no aceptar sobornos para abandonar su posición legislativa. La diputada Paz aseguró que líderes de su partido político estaban involucrados en estas amenazas.

En noviembre de 2006, el Congreso aprobó una Ley de Transparencia fuerte que permite a los ciudadanos acceso a la información con respecto a operaciones y decisiones realizadas por el gobierno. El Congreso eligió a tres Comisionados considerados controversiales; al final del año el gobierno aún no había implementado esta ley.

Sección 4 Actitud del Gobierno Sobre Investigaciones Internacionales y No Gubernamentales de Supuestas Violaciones a Derechos Humanos

Una amplia variedad de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales generalmente operaron en el país investigando y publicando los resultados de sus averiguaciones sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios gubernamentales generalmente cooperaron con las organizaciones sin fines de lucro. Con ciertas excepciones notables, sin embargo, los funcionarios gubernamentales fueron usualmente receptivos a los puntos de vista de las ONGs. El gobierno restringió o rechazó la inscripción de algunas organizaciones de sociedad civil.

Durante el año, una empresa de seguridad privada acosó a periodistas y abogados que trabajaban para la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), incluso buscando que las autoridades le revocarán la licencia de operación a ASJ. A finales de año, el Ministerio de Gobernación y Justicia y la Oficina del Procurador General no encontraron bases para revocar la licencia.

Durante el año, periodistas y abogados de ASJ y su personal continuaron recibiendo amenazas, incluyendo 50 mensajes con amenazas de muerte y mensajes anónimos de amenazas enviados a la revista de Internet de anticorrupción y derechos humanos de ASJ llamada *Revistazo*. En mayo, Selvin Richard Swasey, propietario de la empresa de seguridad Setech, supuestamente acosó e hizo llamadas anónimas de amenaza a un abogado de ASJ, como resultado de la investigación sobre irregularidades en la operación las empresas de seguridad privada de Swasey.

El gobierno revocó o negó la inscripción legal de los grupos de incidencia homosexual-lésbica. (ver la sección 5).

En febrero, el Ministerio de Gobernación y Justicia sometió a la Corte Suprema la determinación de inscripción para la ONG Jueces para la Democracia. Hubo reportes que debido a la insatisfacción con la junta directiva propuesta por el grupo, la Corte decidió atrasar definitivamente la solicitud de registro de la ONG. Después que los miembros de la ONG se quejaron con la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el atraso de la inscripción por parte del gobierno, la Corte Suprema de Justicia inmediatamente les concedió el reconocimiento legal a Jueces para la Democracia.

El 3 de septiembre, personas desconocidas supuestamente trataron de abrir a la fuerza el baúl de un vehículo del defensor de justicia ambiental, Monseñor Luís Alfonso Santos. La policía evitó que delincuentes secuestraran a Monseñor Santos. Al final del año no hubo información sobre ninguna investigación sobre el incidente, y la identidad de los asaltantes permaneció siendo desconocida. Los

medios de comunicación reportaron que los malhechores estaban conectados con la compañía minera MINOSA.

El 15 de septiembre, en Dulce Nombre de Culmí, personas desconocidas asesinaron al abogado ambientalista Mario Guifarro Ramírez. Al final del año no hubo información sobre una investigación sobre su asesinato.

El 31 de octubre, asaltantes desconocidos en el pueblo de San Ignacio agredieron físicamente al defensor de derechos ambientales, el sacerdote José Alberto Palma. En los últimos tres años, el sacerdote había sido agredido once veces. Al final del año no había información sobre la investigación de estos incidentes.

No hubo progreso, y no se esperaba alguno, sobre la investigación de las amenazas de muerte hechas en 2006 por personas desconocidas en contra de Monseñor Santos después que él lideró protestas ese año en contra de compañías mineras.

El gobierno cooperó con organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyas oficinas en Guatemala, México y Ginebra visitaron el país un total de nueve veces durante el año.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), una institución gubernamental autónoma, dirigida por el Comisionado de Derechos Humanos, Dr. Ramón Custodio López, quien tuvo libre acceso a todas las instituciones civiles y militares y a centros de detención, y operó con inmunidad total y sin la interferencia del gobierno o de los partidos políticos. En general, el gobierno cooperó con el CONADEH, pero le asignó una cantidad inadecuada de fondos y otros recursos. En marzo, Custodio entregó el reporte anual del Comisionado de Derechos Humanos, que criticaba los altos niveles de violencia en el país. La legislatura fue receptiva a los hallazgos del reporte. El público le dio confianza sustancial al pronunciamiento del Comisionado pero se mostró insatisfecho que el gobierno le diera al Comisionado recursos inadecuados para desempeñar sus funciones efectivamente.

Sección 5 Discriminación, Abusos Sociales, y Trata de Personas

La ley prohíbe la discriminación en base a raza, género, discapacidad, idioma, o clase social; sin embargo, no fue efectivamente aplicada en la práctica. Las elites políticas, militares y sociales generalmente gozaron de impunidad en el sistema jurídico; las mujeres fueron sujetas a discriminación social y económica.

Mujeres

La ley criminaliza todo tipo de violaciones, incluyendo la violación marital. Con la excepción de la violación marital, la cual se evalúa según el caso, la violación se considera un crimen público. Un violador puede ser procesado aún cuando la víctima no presente una denuncia. Las sentencias por violación son de tres a nueve años de prisión, y los tribunales han cumplido con estas sentencias en la práctica.

La violencia contra la mujer continuó siendo generalizada. La ley penaliza la violencia doméstica con penas de entre dos a cuatro años en prisión. Las únicas sanciones legales para actos de violencia doméstica de menor grado son de servicio comunitario y detención preventiva por 24 horas si el agresor es capturado durante el acto. La ley establece una sentencia máxima de tres años en prisión por desobedecer una orden de restricción relacionada con un crimen de violencia intrafamiliar.

El gobierno no aplicó efectivamente la ley con relación al abuso doméstico. Hasta diciembre, el Ministerio Público recibió 9,400 denuncias de violencia doméstica. Hasta agosto, aproximadamente 200 mujeres fueron asesinadas, siendo la violencia doméstica la causa más común de las muertes.

En enero el Congreso Nacional aprobó financiamiento para una unidad de investigación de muertes violentas de mujeres en la Oficina de la Fiscalía Especial de la Mujer.

El gobierno trabajó con CARE y otras ONGs para proporcionar capacitaciones especializadas a oficiales de policía para la aplicación de la ley relacionada con la violencia doméstica. Hasta diciembre, los esposos que habían cometido actos de violencia doméstica en contra de sus esposas habían asesinado a tres oficiales de policía que respondieron a esos incidentes. Dos instalaciones, ambas manejadas por ONGs, proporcionaron albergue para mujeres maltratadas. El albergue en Tegucigalpa acomodó a 20 mujeres y a sus familias. Además, otros seis centros privados para mujeres maltratadas ofrecieron asistencia legal, médica y psicológica.

Aunque la prostitución de adultos es legal y relativamente común, la ley prohíbe la promoción y facilitación de la prostitución. Las mujeres fueron traficadas para ser explotadas sexualmente y para garantizar el pago de deudas.

La ley prohíbe el acoso sexual en los lugares de trabajo, y establece penas de uno a tres años de prisión. El acoso sexual continuó siendo un problema, pero el gobierno no aplicó la ley de forma efectiva.

Aunque la ley establece que las mujeres y los hombres tienen iguales derechos de acuerdo a la ley, incluyendo los derechos de propiedad en caso de divorcio, en la práctica a las mujeres se les negaron estos derechos.

La mayor parte de las mujeres que desempeñaban ocupaciones de baja calidad y posiciones informales con salarios bajos, como el trabajo doméstico, no contaron con regulaciones legales de protección. Las mujeres estuvieron representadas en pequeña proporción en la mayor parte de profesiones, y las actitudes culturales limitaron sus oportunidades profesionales. De acuerdo a la ley, las mujeres tienen igual acceso que los hombres a oportunidades educacionales. La ley requiere que los empleadores paguen a las mujeres salarios iguales por trabajos similares, pero los empleadores usualmente consideran que los trabajos de las mujeres son menos exigentes que los de los hombres para justificar el pago de salarios más reducidos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los salarios de las mujeres representaban el 66 por ciento de los salarios de los hombres. A pesar que existen disposiciones legales contra tales prácticas, trabajadoras del sector de exportación de textiles continuaron reportando que fueron obligadas a realizarse pruebas de embarazo como condición para ser empleadas.

El gobierno mantuvo como posición a nivel técnico a la directora del Instituto Nacional de la Mujer, que desarrolla políticas sobre la mujer y género. Algunas ONGs trabajaron activamente sobre diversos temas relacionados con la mujer, incluyendo al Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, el cual trabajó sobre temas de trata de personas, explotación sexual comercial, empleados de la maquila textil y trabajadoras domésticas.

Niños

El gobierno estuvo comprometido con los derechos y el bienestar de los niños. Sin embargo, el sistema educativo enfrentó serios problemas, incluyendo altos índices de deserción, baja matrícula en el nivel secundario, inequitativa distribución de los gastos del gobierno, ausentismo de los maestros, y baja calidad de la educación en las aulas de clase.

Si bien la ley garantiza una educación gratuita, universal y obligatoria hasta los 13 años, un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2006 estimó que hasta 368,000 del total de 1.7 millones de niños entre las edades de 5 y 12 años no recibieron ningún tipo de educación durante el año. En áreas rurales había pocas escuelas, algunas sin libros u otros materiales didácticos para los estudiantes. Muchos niños en las áreas rurales asistieron a la escuela solo hasta el tercer grado y luego empezaron a trabajar en actividades agrícolas. No existieron escuelas secundarias en ciertas áreas rurales.

Las niñas y niños tuvieron un acceso equitativo a las limitadas facilidades educativas disponibles; sin embargo, los niveles de asistencia para las niñas fueron ligeramente menores que las de los varones.

Las niñas y niños tuvieron un acceso equitativo a los cuidados médicos proporcionados por el Estado.

El abuso infantil fue un serio problema. La ley establece sentencias de prisión de hasta 3 años para personas condenadas por abuso a menores. No hay información disponible sobre el número de casos reportados de abuso infantil.

La trata de niños para la explotación sexual comercial y la prostitución infantil fueron problemas. El trabajo infantil también lo fue, particularmente en cultivos de café y melón, pesca, y producción de cal y piedra caliza.

El gobierno y organizaciones para la defensa de los derechos de los niños estimaron que existieron unos 20,000 niños en la calle, y solo la mitad de los ellos tuvo acceso a albergues. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo reportó que el 60 por ciento de los niños en la calle sufrieron de depresión y que el 88 por ciento consumió sustancias ilegales, incluyendo inhalación de pegamento y marihuana. Muchos niños en la calle fueron abusados o explotados sexualmente. Los programas para solucionar este problema fueron limitados.

El abuso de jóvenes y niños en barrios pobres y en pandillas continuó siendo un problema serio. Aproximadamente 175,000 adolescentes estaban viviendo con pandillas violentas. Miembros de la policía y personas particulares participaron en acciones violentas contra jóvenes y niños pobres. Casa Alianza reportó que el 66 por ciento de los niños en la calle habían sido asaltados por la policía. Grupos de derechos humanos afirmaron que algunos miembros de las fuerzas de seguridad colaboraron con grupos civiles y utilizaron fuerza letal contra supuestos criminales reconocidos o contra sospechosos de pertenecer a pandillas, así como contra otros jóvenes no reconocidos por estar involucrados en actividades criminales.

El gobierno municipal de Tegucigalpa operó 12 albergues temporales con la capacidad de 240 niños. Casa Alianza operó 3 albergues (con capacidad para 175 niños) para víctimas de explotación sexual comercial, niños en la calle, y niños con problemas de abuso de sustancias. La ONG brindó asistencia a aproximadamente 2,500 niños al año, intentando reintegrar al mayor número con sus familias. Otras organizaciones privadas y centros del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia también albergaron niños en la calle y cuidaron a aproximadamente 2,500 niños.

Hacia finales de año, los tribunales sentenciaron a 70 años de prisión a Juan Carlos Miralda “Pantera” Bueso y Darwin Alexis “Chele Sula” Ramírez en relación a la masacre de Chamelecón en 2004 que resultó en 28 muertos, seis de ellos menores de edad. Las autoridades liberaron a dos sospechosos más, y cuatro de ellos continúan prófugos.

La ley prohíbe la asociación ilícita, incluyendo la membresía a pandillas y bandas del crimen organizado, por lo cual prescribe términos de 3 a 12 años en prisión, dependiendo del nivel de participación y jerarquía del individuo. Hasta noviembre, 463 personas habían sido detenidas por asociación ilícita.

Estadísticas hasta finales de año indicaron que había aproximadamente unos 30,000 a 40,000 miembros de pandillas, muchos de ellos menores de edad, que pertenecían a casi 500 grupos o subgrupos separados; otros informes señalaron que aproximadamente 5,000 participaron activamente en acciones criminales. Ellos fueron considerados responsables de entre el 20 y el 50 por ciento de los crímenes violentos en el país. La membresía de pandillas está principalmente concentrada en las áreas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La Mara Salvatrucha (MS 13) y la Mara 18 son las pandillas más grandes y violentas, y agrupan a casi el 40 por ciento de la membresía total de pandillas en todo el país.

Trata de Personas

Aunque una nueva ley penaliza la trata de personas, hubo informes que personas fueron víctimas de trata desde fuera y dentro del país. Aunque no existen estadísticas gubernamentales, Casa Alianza estimó que hubo aproximadamente 10,000 víctimas de explotación sexual en o del país. El problema estaba creciendo debido al nexo entre la trata de personas y la inmigración ilegal. En el área metropolitana de Tegucigalpa, un estimado de 1,710 niñas y 570 varones sufrieron de explotación sexual comercial.

El propósito más común del tráfico internacional fue la explotación sexual comercial de mujeres y niños. Casa Alianza estimó 90 por ciento de los menores víctimas de trata dentro del país eran niñas. Mujeres y niños fueron víctimas de trata llevados hacia Guatemala y también dentro del país, generalmente desde zonas rurales a urbanas. La mayoría de las víctimas extranjeras víctimas de trata con destino a Honduras para explotación sexual comercial venían de países vecinos. Las autoridades estimaron que entre 20 y 30 niños (el 96 por ciento de ellos niñas) cruzaron la frontera a diario (aproximadamente 15,000 por año) para propósitos relacionados con explotación sexual. El gobierno retornó mensualmente desde México y Guatemala aproximadamente 30 menores víctimas de trata, con 25 menores repatriados desde México el 26 de octubre.

Las pandillas, el crimen organizado y traficantes de personas estaban dentro de los principales traficantes con el propósito de realizar actividades de explotación sexual comercial. La mayoría de los traficantes eran aparentemente ciudadanos de Guatemala, México, China o Taiwán. Existen reportes que familias vendieron a sus hijas con el propósito de comercializarlos. La trata internacional fue realizada por tierra; el gobierno mantuvo control de las fronteras terrestres del país solo en sectores específicos. La trata fue realizada utilizando tanto documentos válidos como falsificados.

La ley establece penas y define delitos relacionados con la trata, incluyendo incesto, lascivia, abuso, prostitución, pornografía, e infectar deliberadamente a alguien de VIH-SIDA. Las penas incluyen multas que oscilan entre los \$5,294 y \$26,469 (entre 100,000 y 500,000 Lempiras) y condenas en prisión de entre 4 a 20 años de duración. La aplicación de esta ley no ha sido efectiva. Los inadecuados fondos del gobierno para combatir la trata de personas, corrupción, y despidos rutinarios de empleados gubernamentales limitaron la habilidad del gobierno para combatir la trata de personas.

Hubo 13 fiscales en Tegucigalpa, 5 en San Pedro Sula, y 2 en La Ceiba que formaron parte de la Oficina de la Fiscalía Especial para la Niñez, además de 8 investigadores especializados en abuso de menores en Tegucigalpa, 4 de los cuales se enfocaron en la explotación sexual comercial de menores. El gobierno incrementó el número de analistas de investigación de trata en Tegucigalpa asignados a asuntos de la niñez pero no proporcionó personal suficiente en otras municipalidades.

Hasta diciembre, el gobierno investigó 71 casos de trata, llevó 10 casos a juicio, y sentenció a otros dos defendidos a términos de 5 años en prisión.

En noviembre la policía realizó operativos en 4 centros de masaje en Tegucigalpa, rescató a 2 víctimas menores de edad, y arrestó con cargos de prostitución a Jorge Geovanny Rodríguez Flores y Miriam Elizabeth Paz Pereira.

El 21 de diciembre, la DGIC capturó a José Neptalí Zúñiga Acosta, contra quién el gobierno levantó cargos de violación de menores y pornografía. Al final del año el caso no había llegado a juicio.

Al final del año no hubo más progreso, y no se esperaba ninguno, en relación a la continua detención de tres miembros de un cartel internacional de trata de personas arrestados en 2005 por transportar mujeres para ser explotadas comercial y sexualmente en el extranjero.

La División en Contra el Abuso, Trata y Explotación Sexual Comercial (DATESI), una unidad de investigación criminal policial, realizó operaciones de detección alrededor del país incluyendo autopistas, aeropuertos, puertos y hoteles. El 27 de septiembre, DATESI arrestó a una mujer hondureña por llevar a una menor hacia México con fines de explotación sexual comercial.

Al final del año, el gobierno rescató a 15 menores en Tegucigalpa en siete casos separados. DATESI también rescató en Guatemala a 9 niñas hondureñas, una de México, y tres de El Salvador; una ONG hondureña estaba encargándose del cuidado de estas 13 víctimas.

La constitución prohíbe la extradición de nacionales hondureños, pero permite la extradición de no-ciudadanos con cargos por haber incurrido en actos de trata de personas en otros países. No existieron casos de extradición relacionados con trata de personas durante el año.

Entre septiembre y noviembre, el gobierno lanzó un sistema nacional de rastreo para casos de trata en San Pedro Sula y Tegucigalpa, y colaboró con ONGs para identificar personas que testifiquen en juicios. Casa Alianza brindó servicios sociales y hospedaje temporal a 80 víctimas de trata. El gobierno no realizó estudios sistemáticos en poblaciones vulnerables en búsqueda de víctimas.

El gobierno incrementó sustancialmente el entrenamiento para evitar la trata y las labores de extensión comunitaria con la policía, fiscales, y otros funcionarios gubernamentales, realizando aproximadamente 50 sesiones de entrenamiento a lo largo del país. Save the Children Honduras completó un amplio mapeo de rutas de trata que distribuyó a la policía y oficiales migratorios para facilitar investigaciones y arrestos. El gobierno coordinó con ONGs y la Organización Internacional para las Migraciones para trasladar a víctimas a albergues y brindarles asistencia para reintegrarse a la sociedad.

Personas con Limitaciones Físicas

La ley prohíbe la discriminación contra las personas que sufren de discapacidades físicas o mentales para acceder a empleo, educación, servicios de salud, o para realizar servicios diversos al Estado, pero el gobierno no aplicó adecuadamente estos principios. Se estimó que 51 por ciento de las personas con discapacidades eran analfabetas, comparado con el 19 por ciento entre la población general.

Los estatutos establecen que es ilegal que un empleador discrimine a un trabajador a causa de una discapacidad. Durante el año, no hubo informes de discriminación en contra de personas con limitaciones para acceder a empleo, educación, servicios de salud, o para proveer otros servicios al Estado. La ley determina que debe facilitarse el acceso a edificios para personas con discapacidades. En la práctica, solo algunos edificios fueron accesibles.

En enero, la Fiscalía Especial de la Mujer criticó públicamente la práctica en hospitales psiquiátricos de esterilizar a pacientes sin su consentimiento. No hubo información disponible sobre investigaciones posteriores realizadas sobre este asunto.

También la ley requiere el Ministerio de Gobernación y Justicia mantenga una oficina para personas con discapacidades, aunque el gobierno no facilitó fondos o personal para operar esta oficina. Existe un Comisionado para personas con discapacidades en la Casa Presidencial, y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional también se enfocó en asuntos de importancia para personas con discapacidades.

Pueblos Indígenas

Aproximadamente 621,000 personas, que constituyen el 9 por ciento de la población general, eran miembros de grupos indígenas o grupos étnicos. Estos pobladores, que incluyen miskitos, tawahkas, pech, tolupanes, lencas, chortíes, nahuales, isleños y garífunas, vivieron en 362 comunidades y, en general, tuvieron poco o ningún poder político en la toma de decisiones que afectan sus tierras, sus culturas, sus tradiciones y la utilización de recursos naturales.

La mayor parte de los títulos de las propiedades indígenas fueron comunitarios, estableciendo derechos de utilización de las tierras a determinados miembros del grupo étnico. Usualmente, la definición de las propiedades indígenas es confusa, y se ha hecho en base a documentos que datan desde mediados del siglo XIX. La falta de títulos de propiedad claros ocasionó invasiones y conflictos de expropiación con pobladores no indígenas sin tierra y poderosas elites empresariales e instituciones gubernamentales interesadas en explotar las costas, bosques, y otras tierras que han sido tradicionalmente ocupadas o utilizadas por grupos indígenas o de otras etnias. Tanto las comunidades indígenas como las no indígenas criticaron la supuesta complicidad del gobierno para la explotación de la madera y de otros recursos naturales en estas tierras. Amnistía Internacional (AI) informó sobre la utilización de cargos criminales con motivaciones políticas para detener a personas indígenas. AI afirmó que estas detenciones comúnmente tenían la intención de “obstaculizar los esfuerzos de líderes indígenas para asegurar el reconocimiento de la reivindicación de los títulos de propiedad comunitarios de sus grupos étnicos”.

Hubo varias protestas de parte de los garífunas y de otros grupos indígenas por disputas de derecho a tierra y percibieron la discriminación del gobierno. Líderes garífunas continuaron emplazando al gobierno sobre sus preocupaciones con relación a la ejecución de proyectos de desarrollo comercial a gran escala que se realizan en tierras costeras que han sido tradicionalmente ocupadas y utilizadas por sus comunidades. El gobierno permitió el desarrollo de proyectos turísticos de compañías nacionales e internacionales en las tierras en disputa, utilizando contratos de arrendamiento por 100 años, señalando que estas tierras volverían a ser propiedad de los garífunas cuando expire este período. Durante el año, líderes garífunas informaron que fueron víctimas de acoso, amenazas, y asaltos. Muchos activistas por los derechos de los garífunas continuaron oponiéndose a los intentos del gobierno de facilitar títulos de tierras individuales a miembros de la comunidad en terrenos que tradicionalmente fueron propiedad de las comunidades garífunas.

El 12 de junio, el líder garífuna Félix Ordóñez Suazo fue asesinado en Punta Piedras, Colón. Los residentes de la comunidad garífuna presentaron la denuncia con la Policía en Trujillo, identificando a Luis y David Portillo, quienes estaban invadiendo las tierras comunales de Punta Piedra, como los supuestos asesinos. En julio, el CIDH pidió que el gobierno aplicara medidas de protección a un testigo ocular del asesinato. Para finales de año, el gobierno no había cumplido con la solicitud de la Comisión y no había llevado a cabo ninguna investigación del incidente.

El 8 de agosto, los líderes garífunas se quejaron ante el Ministerio Público que habían retrasado seriamente los procesos de sus demandas pendientes sobre asesinatos, usurpación de tierras, destrucción de recursos naturales y discriminación. La comunidad garífuna también se quejó ante el gobierno sobre el acceso limitado a servicios de salud y educación; la discriminación racial; y la falta de acceso a energía eléctrica, agua potable y carreteras. Los líderes de la comunidad garífuna pidieron que el gobierno remediara las desigualdades sociales y económicas que enfrenta esa comunidad en relación a la población general, e institucionalizar la educación bilingüe intercultural para preservar su cultural indígena.

No hubo más avances sobre el encarcelamiento de varias personas acusadas de blandir una pistola y amenazar a muerte a la líder garífuna Jessica García en julio de 2006 para obligarla a entregar tierras garífunas a una empresa de bienes raíces. El 14 de abril en San Pedro Sula, sujetos desconocidos hicieron varios disparos a un taxi que transportaba a Joselyn Lizet Rivas, hija de Jessica García. Aunque Rivas resultó ilesa, no se registró información sobre algún seguimiento a la investigación de este incidente.

No hubo avances sobre el encarcelamiento preventivo en septiembre de 2006 de tres individuos que supuestamente asesinaron en agosto de ese año a Mirna Isabel Santos Thomas, miembro de la comunidad garífuna.

Hasta diciembre, seis oficiales navales implicados en febrero de 2002 en el asesinato de dos jóvenes garífunas, continuaban en prisión esperando la resolución de sus casos.

El gobierno realizó esfuerzos mínimos para trabajar con los grupos indígenas para solventar sus preocupaciones en relación a la tenencia y el uso de sus propiedades ancestrales. Los tribunales comúnmente negaron recursos legales a grupos indígenas y frecuentemente favorecieron a las partes no indígenas que cuentan con recursos e influencia. La falta de resarcimiento legal habitualmente ocasionó que los grupos indígenas intentaran recuperar sus tierras por medio de invasiones a la propiedad privada, lo que provocó que las autoridades tomaran represalias a través de la fuerza.

Otros Abusos Sociales y Discriminación

No existen leyes discriminatorias fundamentadas en orientación sexual, pero en la práctica, la discriminación social basada en la orientación sexual fue generalizada. Representantes de ONGs de derechos de diversidad sexual aseguraron que sus miembros fueron asesinados, golpeados y sujetos a otros maltratos de parte de autoridades de seguridad. En los casos en que personas lesbianas, homosexuales y transgénero fueron encontradas muertas, el fiscal se encontró con serias dificultades debido a que las víctimas habían ocultado su identidad u orientación sexual o, en muchos casos, se estaban escondiendo de sus familias. Las investigaciones criminales se clasificaron como género femenino o masculino, pero no reconocieron la categoría de “persona transgénero”. Grupos de derechos de diversidad sexual aseguraron que fuerzas de seguridad, instituciones de gobierno y empleadores del sector privado utilizaron prácticas discriminatorias anti-homosexuales para negarles trabajo. Estos grupos también reportaron que la intimidación, temor a represalias y la corrupción policial causaron que las personas homosexuales y lesbianas víctimas de abusos se rehusaran a presentar cargos o proceder con las acusaciones.

El gobierno puso como requisito, como condición para la personería jurídica, que las organizaciones de derechos de diversidad sexual eliminaran cualquier referencia en sus estatutos a la promoción del respeto por los derechos de las personas homosexuales, lesbianas o transgénero. En marzo, el Secretario General de Ministerio de Gobernación y Justicia públicamente comentó que el gobierno le negaba el registro a las ONGs de derechos homosexuales porque sus propósitos no se apegaban a las “buenas costumbres.”

El 24 de abril, Javier Medina, presidente de la Asociación Kukulkán, presentó una apelación contra las modificaciones unilaterales del Ministerio de Gobernación y Justicia en 2006 a los registros legales del Colectivo Violeta, la Asociación Kukulkán y la Asociación de Homosexuales, Lesbianas y Travestis. Estas modificaciones eliminaron las referencias a la defensa de los derechos de los homosexuales y en su lugar establecieron que el propósito de estas organizaciones era solamente la lucha contra el VIH/SIDA. Medina estableció que los homosexuales eran vulnerables y sujetos a constantes y crecientes violaciones de los derechos humanos. No hubo información disponible sobre el estatus de la apelación presentada por Medina.

La organización de derechos de diversidad sexual, la Asociación Lesbiana-Gay Arco Iris de Comayagüela, informó que entre enero y marzo, siete homosexuales fueron asesinados debido a su sexualidad por sujetos desconocidos, y que varias personas homosexuales abandonaron el país por temor a la persecución social y de las fuerzas de seguridad.

El 18 de marzo, la policía golpeó y detuvo a Donny Reyes, tesorero de la Asociación Lesbiana-Gay Arco Iris de Comayagüela. Se dice que luego la Policía encarceló a Reyes en una celda con 57 pandilleros que lo violaron y lo golpearon. Reyes presentó una queja formal y seguidamente fue hostigado por la Policía. Hasta final del año no había información sobre los avances del caso.

Amnistía Internacional informó que el 10 de abril, cinco hombres, con anuencia policial, físicamente atacaron al activista travesti Josef Fabio Estrada. Se dice que la Policía impidió que otras personas le ayudaran a Estrada mientras lo atacaban. El 27 de abril, las autoridades de seguridad acusaron a Estrada de intento de homicidio y robo, y lo detuvieron temporalmente en una penitenciaría de criminales convictos. Se informó que los oficiales de seguridad no detuvieron ni presentaron cargos contra los agresores de Estrada. No hubo más información sobre alguna investigación de estos incidentes.

El 26 de mayo, se informó que la Policía arrestó y arbitrariamente detuvo a la activista travesti Claudia Spellmant y a otras siete personas homosexuales y que supuestamente abusaron físicamente de ellos. No hubo información disponible sobre alguna investigación de estos incidentes.

Para final de año, la Policía había detenido a dos sospechosos del asesinato en agosto de 2006 de Ramón Valladares, directivo de la Comunidad Gay Sampedrana.

La discriminación laboral por la edad continuó siendo un problema serio.

Sección 6 Derechos de los Trabajadores

a. El Derecho de Asociación

La ley garantiza el derecho de los trabajadores a formar y a asociarse en sindicatos de su elección, y los trabajadores ejercieron este derecho en la práctica. La ley prohíbe que los miembros de las fuerzas armadas y de la policía se organicen en sindicatos, y también prohíbe que los empleados públicos presenten peticiones para la formación de sindicatos o para participar en negociaciones colectivas. De acuerdo a estadísticas de julio del Ministerio de Trabajo, aproximadamente el 8 por ciento de la fuerza laboral, con excepción del sector agrícola, y casi un 13 por ciento de los 133,000 empleados de la maquila estaban sindicalizados.

La ley prohíbe que existan más de dos sindicatos en una sola empresa, determina que un sindicato debe estar constituido por al menos 30 trabajadores, prohíbe que ciudadanos extranjeros sean dirigentes de un sindicato, establece que los dirigentes del sindicato deben estar empleados en la actividad productiva de la

empresa que el sindicato representa, y restringe la formación de sindicatos en empresas agrícolas con menos de 10 empleados.

Diversas compañías privadas continuaron con la organización de asociaciones solidarias, que facilitaron créditos y otros servicios a los trabajadores que fueron miembros de estas asociaciones. Representantes de grupos de trabajadores organizados criticaron a estas asociaciones, argumentando que no permitieron la realización de huelgas, que no contaban con los procedimientos adecuados para la presentación de quejas, que estaban diseñadas para desplazar a los sindicatos genuinos e independientes, y que fueron dominadas por los empleadores.

A pesar que la ley prohíbe que los empleadores provean remuneración por participar en actividades sindicales, ésta fue una práctica común, y algunos empleadores amenazaron con clausurar empresas en donde se organizaron sindicatos, e intimidaron o despidieron a trabajadores que intentaron sindicalizarse. Algunas compañías extranjeras cerraron sus operaciones cuando fueron notificados que sus trabajadores pretendían organizar un sindicato.

El Ministerio de Trabajo puede tomar determinaciones administrativas sobre denuncias de despidos injustificados y establecer multas a las empresas, pero solamente un tribunal de justicia puede ordenar la restitución de un trabajador. Generalmente, los empleadores no respetaron las decisiones de los juzgados de restituir a los empleados que habían sido despedidos por participar en actividades sindicales, y la falta de restitución de trabajadores fue un serio problema.

Aunque la ley prohíbe la elaboración de listas negras, hubo evidencia creíble que señala que las compañías maquiladoras elaboraron listas negras de empleados que intentaron organizar sindicatos. Hubo reportes de trabajadores de maquila que supuestamente fueron despedidos por participar en actividades sindicales habiendo sido contratados por una o dos semanas, siendo despedidos posteriormente sin ninguna justificación. Empleados de maquilas informaron haber visto antecedentes laborales en computadoras que incluían la participación previa en sindicatos en la información del personal. Algunos empleadores informaron a trabajadores previamente sindicalizados que no podían ser contratados debido a su anterior participación en actividades sindicales.

Frecuentemente, el Ministerio del Trabajo no fue capaz de proveer una protección efectiva a los organizadores de sindicatos. La corrupción y la conducta anti-ética de los inspectores incluyeron la venta de nombres de empleados que participaron en la formación de sindicatos a las autoridades de las empresas antes que el gobierno reconociera oficialmente al sindicato. El gobierno no adjudicó los recursos adecuados para que los inspectores llevaran a cabo sus obligaciones. Las observaciones de 2007 del Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) notaron con preocupación que las oficinas de inspectoría del país no contaban con los recursos financieros para cubrir viajes de inspecciones y pidieron que el gobierno proporcionara facilidades de transporte y otras necesidades para que los inspectores pudiera hacer su trabajo.

En junio, la fábrica de piezas automotrices Alcoa Fujikura Limitada Honduras despidió a 74 empleados porque los trabajadores intentaron formar un sindicato. Hubieron informes de que los inspectores de trabajo le informaron al empleador de la intención de formar el sindicato antes de que los trabajadores pudieran solicitar protección legal durante el período de formación sindical. Para final de año, la fábrica aún no había reintegrado a los empleados despedidos.

En julio, la maquila Euha de Honduras cerró sin pagarles las prestaciones legales a 274 empleados.

En noviembre, las fábricas Jerzees Honduras y Jerzees Choloma, del grupo Fruit of the Loom, reintegraron a 48 de 118 empleados que despidieron en julio y marzo por formar un sindicato.

Los líderes de un sindicato legalmente reconocido en la maquila Petralax, se quejaron que la administración los despidió en junio, julio y diciembre. No hubo información disponible sobre el seguimiento del gobierno sobre estos incidentes.

La ONG Consorcio de Derechos de los Trabajadores informó que la maquila Star S.A. despidió empleados que intentaron formar un sindicato para protestar por las condiciones inadecuadas de trabajo y el maltrato.

b. El Derecho a Organización y Negociación Colectiva

La ley garantiza los derechos de organización y negociación colectiva, pero en la práctica el gobierno no protegió estos derechos. Aunque la ley establece que un empleador debe comenzar a negociar colectivamente cuando los trabajadores han organizado un sindicato, generalmente los empleadores se rehusaron a negociar con el sindicato.

La ley garantiza el derecho a la huelga y en la práctica los trabajadores ejercieron este derecho. El 27 de agosto, maestros, conductores de taxis, transportistas y otros grupos obstaculizaron carreteras a lo largo del país para protestar el manejo del gobierno en varios asuntos internos, incluyendo la agricultura, el ambiente, derechos de los indígenas, seguridad ciudadana y la pobreza. Durante la protesta, un conductor mató de un balazo a un maestro que estaban protestando.

La ley prohíbe las huelgas en un amplio rango de actividades económicas consideradas servicios esenciales y cualesquiera otros que, a juicio del gobierno, afecten los derechos individuales a la seguridad, la salud, la educación y la vida económica o social.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó las restricciones de la ley del derecho a huelga para los trabajadores del sector petróleo y para todos los empleados gubernamentales, a excepción de aquellos que trabajan en las instituciones autónomas del Estado. En algunos casos, los empleados públicos participaron en paros laborales ilegales sin experimentar represalias. Sin embargo, en estos casos, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de declarar ilegales tales protestas a petición del empleador o de la entidad administradora de servicios del sector público, y de despedir a los manifestantes. Las restricciones legales con respecto a las huelgas incluyen una prohibición a las federaciones y confederaciones sindicales de convocar a huelga, y el requerimiento que determina que se debe alcanzar una mayoría de dos terceras partes de los votos de la totalidad de miembros de la organización sindical para convocar a una huelga, en lugar de una mayoría simple.

La ley aplica restricciones adicionales sobre huelgas en 102 zonas registradas como zonas de procesamiento de exportaciones (ZPE) y en 19 parques industriales operando en las ZPE. 26 compañías adicionales que proporcionaron servicios a los parques industriales tuvieron sus propias zonas libres, fuera de los parques industriales. En ausencia de sindicatos y negociaciones colectivas, varias empresas en las ZPE crearon asociaciones solidarias que, hasta cierto grado, funcionaron como sindicatos con el propósito de determinar salarios y negociar condiciones laborales. Otras compañías en las ZPE utilizaron el salario mínimo para establecer los niveles iniciales de salarios y ajustaron las escalas salariales en las negociaciones con grupos similares de obreros de planta y otros empleados, en base a su antigüedad, habilidades, categorías de trabajo, y otros criterios.

c. Prohibición de Trabajos Forzados o Esclavizantes

En general, la ley prohíbe los trabajos forzados o esclavizantes, incluyendo los realizados por menores.

d. Prohibición del Trabajo Infantil y la Edad Mínima para Trabajar

La ley regula el trabajo infantil y establece que los niños menores de 16 años o los estudiantes de 16 años o más no pueden trabajar, a menos que las autoridades determinen que su trabajo es indispensable para los ingresos de la familia y que el trabajo no interferirá con su educación. La Constitución y la ley establecen que el número máximo de horas de trabajo para un niño menor de 17 años es de 6 horas diarias y 30 horas semanales. Los padres o guardianes legales pueden solicitar un permiso especial del Ministerio del Trabajo para permitir que niños entre las edades de 14 y 15 años trabajen, siempre y cuando el Ministerio realice un estudio de hogar para asegurarse que el menor demuestra una necesidad económica para trabajar, y que el niño no trabajará fuera del país o en condiciones peligrosas, incluyendo la pesca en mar adentro. En la práctica, el Ministerio de Trabajo realizó sólo un limitado número de estudios de hogar.

La ley prohíbe realizar labores nocturnas y horas extras para menores de 16 años, y requiere que los empleadores que tienen más de 20 niños en edad escolar trabajando en su negocio proporcionen un lugar para una escuela. En la práctica, la gran mayoría de niños trabajaron sin contar con un permiso del Ministerio.

El gobierno no dedicó los recursos adecuados o proporcionó los inspectores en las instituciones para que dieran seguimiento, prevención o monitorearan el cumplimiento de las leyes laborales.

El Ministerio del Trabajo no aplicó de forma efectiva las leyes relativas al trabajo infantil, exceptuando al sector *maquila*, y ocurrieron frecuentes violaciones a las leyes sobre trabajo infantil en tareas agrícolas familiares, en el sector agrícola de exportación, incluyendo las industrias del melón, café y caña de azúcar, y en empresas de servicios y comercio a pequeña escala. Muchos niños trabajaron para satisfacer sus necesidades económicas junto con otros miembros de sus familias. Las observaciones de 2007 de la Comisión de Expertos de la OIT expresaron preocupación por la decisión del gobierno de asignar inspectores de trabajo infantil únicamente en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula y solicitaron que el gobierno cumpla con sus propias leyes de llevar a cabo inspecciones de trabajo infantil, aunque fuera con inspectores de trabajo no especializados.

Un estudio realizado en 2004 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), administrado por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT concluyó que aproximadamente 360,000 niños, que constituyen el 14 por ciento de los niños entre las edades de 5 y 18 años, trabajaron ya sea a medio tiempo o a tiempo completo. El IPEC estimó que durante el año esta cifra pudo haber aumentado hasta unos 500,000. Muchos adolescentes de entre 13 y 18 años trabajaron como pescadores submarinos de langostas sin contar con ningún dispositivo de seguridad y sin protección médica. Los niños que trabajaron en granjas de melón y caña de azúcar estuvieron expuestos a pesticidas y a largas horas de trabajo. Aunque los crematorios estaban legalmente prohibidos para los niños, hubo gran cantidad de menores que trabajaron en estos lugares. Hubo casos aislados de menores, por debajo de la edad legal para trabajar, trabajando en maquilas. Un estudio del Programa para la Promoción de la Reforma Educativa en Latinoamérica y el Caribe informó que 350,000 menores hondureños entre las edades de 5 a 17 años se ven obligados a trabajar para sobrevivir.

Casa Alianza realizó un estudio en 20 ciudades del país, y encontró que 10,000 niños fueron víctimas de crímenes de explotación sexual comercial o de trata de personas (ver la Sección 5). Esta ONG afirmó que trabajaron 300,000 jóvenes menores de 15 años, y el 78 por ciento de ellos fueron varones. Aproximadamente 20,000 niños trabajaron realizando labores domésticas en hogares, y el 34 por ciento de los menores trabajadores no asistieron a la escuela.

La IPEC continuó operando programas como parte de un esfuerzo regional durante siete años para combatir la explotación sexual comercial de menores. Una ONG internacional colaboró con varios grupos

de la sociedad civil en la ejecución de un programa para fortalecer la capacidad del gobierno y de la sociedad civil para sacar y prevenir que los menores se involucren en trabajos peligrosos a través de servicios educativos.

El gobierno implementó programas sociales y educativos enfocados hacia los niños en riesgo, incluyendo un programa de becas escolares del Ministerio de Educación para proveer dinero para adquirir útiles escolares para familias muy pobres, y un programa de escolaridad alternativo a través de la radio y educación a distancia para niños en áreas rurales distantes que cuentan con pocas escuelas. Los esfuerzos del gobierno tuvieron un mínimo impacto en la reducción del trabajo infantil, tomando en cuenta la pobreza extrema, las condiciones de hambruna en las áreas rurales, y la falta de empleos para los graduados del sistema educativo.

En abril, un proyecto de una Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas sacó a 60 menores, entre los siete a 17 años, del crematorio de Tegucigalpa. El proyecto se concentró en proporcionarles educación a los menores y a reintegrarlos a la sociedad. Un informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de Verona, Italia y del Centro de ONGs para el Estudio y Control de Contaminantes encontraron serios altos niveles de plomo, arsénico, mercurio y cadmio en las muestras de sangre de los menores que trabajaron en el crematorio.

e. Condiciones Aceptables de Trabajo

El 18 de marzo, el gobierno anunció un incremento general del 9.7% al salario mínimo, retroactivo al 1 de enero. El 26 de diciembre, el gobierno anunció un incremento general del 11% al salario mínimo, vigente a partir del 1 de enero de 2008. De acuerdo con las estadísticas gubernamentales, el salario mínimo con los incrementos cubrió solamente el 64% del costo de la canasta básica para una familia de cinco.

La escala del salario mínimo diario se divide en 10 sectores en base al tamaño de la empresa para la cual labora el trabajador. La escala oscila entre L.54.50 (\$2.88) para la mano de obra no calificada y L.134.89 (\$7.13) para los trabajadores de empresas financieras y de seguros.

En febrero, una comisión conformada por la empresa privada, las organizaciones de trabajadores y el Ministerio de Trabajo, aprobaron la reducción del salario mínimo en las maquilas de ciertas zonas del país.

La ley establece una semana de trabajo de 44 horas máximo, y al menos un período de descanso de 24 horas por cada 6 días de trabajo. La ley requiere el pago de horas extras por el trabajo realizado después de las horas establecidas, y existen prohibiciones sobre la obligatoriedad y la excesiva imposición de horas extras. Los empleadores frecuentemente ignoraron estas regulaciones debido al alto nivel de desempleo y subempleo, y la falta de una efectiva aplicación de la ley por parte del Ministerio del Trabajo. Hubo acusaciones creíbles de horas extras obligatorias en maquilas, sobretodo para las mujeres, quienes comprendieron el 65% de la fuerza laboral de ese sector. Los trabajadores extranjeros gozaron de igual protección bajo la ley, aunque el proceso de trámite de un permiso de trabajo para un extranjero en el Ministerio del Trabajo fue engorroso.

El Ministerio del Trabajo fue el responsable de asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales de salud y seguridad ocupacional, pero no lo hizo de forma consistente o efectiva. Las normas de seguridad para los trabajadores no fueron observadas apropiadamente, particularmente en la industria de la construcción, en el sector de la industria de la maquila, y en las actividades de producción agrícola. Hubo algunas denuncias que administradores extranjeros de compañías en ZPE y otras instalaciones industriales privadas no cumplieron con las normas de salud y seguridad ocupacional. Trabajadores en la producción de piñas y de otras empresas agrícolas comerciales afirmaron que los empleadores los incluían en listas

negras si presentaban denuncias ante las autoridades sobre sus condiciones de trabajo. La ONG Colectivo de Mujeres de Honduras reportó que grandes cantidades de trabajadores de la industria de la maquila sufrían de enfermedades respiratorias (incluyendo tuberculosis), digestivas y de la piel. Estos problemas de salud se debieron al aire contaminado con polvillo y desperdicios de las telas, el ruido, falta de ventilación, falta de equipo de protección y temperaturas extremas.

No hubo avances, y no se esperaban, con respecto a cualquier acuerdo entre empleadores, el gobierno y los buzos en lo que se refiere a la asignación de responsabilidad por el pago de daños a los buzos de langostas que han muerto o han quedado lisiados debido a las malas condiciones de trabajo. La Comisión de Buzos se formó para darle seguimiento a la capacitación de los buzos e inspectores y para establecer el equipo mínimo necesario para prevenir que los buzos sufran accidentes. No se llegó a un acuerdo para asignar la responsabilidad de pago en casos de accidentes. La Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras y la Asociación de Buzos Lisiados le solicitó al Ministerio de Trabajo ayuda para más de 500 buzos lisiados.

La ley no garantiza a los trabajadores el derecho de retirarse de una situación peligrosa en su trabajo sin que con ello pongan en riesgo su continuidad laboral.